



Universidad
Inca Garcilaso de la Vega
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL PLAZO MÁXIMO EN LAS
DILIGENCIAS PRELIMINARES EN LOS DELITOS DE
ORGANIZACIÓN CRIMINAL

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Para optar el título profesional de ABOGADO

AUTOR (ES)

Barraza Flores, Moisés

ASESOR

Arenas Acosta, Juana

Lima, junio del 2022

DEDICATORIA

El único motivo de este logro es mi madre, se la dedico a ella, por ser quien me forjó como persona; recibí todo su apoyo y esfuerzo durante los seis años de estudio y que, a pesar de las dificultades, siempre confió en mí.

A Dios, por guiar mi camino, hizo que haga las cosas correctas en el momento preciso.

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

Miguel de Cervantes.



AGRADECIMIENTOS

Agradecer a mi familia entera, que son el pilar fundamental de mis logros.

A mis amistades de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, porque hicieron que mis seis años de estudio sean interesantes.

A mis docentes de la facultad en mención, por guiarme y por introducirme el derecho de una manera ideal para estar orgulloso de esta maravillosa profesión.

A mi enamorada, porque sin ella no hubiera podido darle celeridad a esta investigación, siendo perseverante e insistente día a día.



INDICE

RESUMEN.....	2
INTRODUCCION.....	3
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL TEMA.....	4
1.1 Antecedentes.....	4
1.1.1 Antecedentes Nacionales.....	4
1.1.2 Antecedentes Internacionales	5
1.2 Marco Conceptual.....	6
1.2.1 Proceso Penal.....	6
1.2.2 Etapas del Proceso Penal Común.....	6
1.2.3 Diligencias Preliminares.....	8
1.2.3.1 El Plazo de la Investigación Preliminar.....	10
1.2.3.2 Plazo Prorrogable adicional a la ordinaria.....	12
1.2.4 Organización Criminal.....	13
1.2.4.1 Definición y características de una organización criminal.....	13
1.2.4.2 La Convención de Palermo y la Delincuencia Organizada.....	14
1.2.4.3 Ley N°30077.....	15
1.2.4.4 El Crimen Organizado en el proceso penal.....	16
1.2.5 El Debido Proceso.....	16
1.2.6 El Plazo Razonable.....	17
1.2.7 El Control de Plazo.....	18
1.2.8 Principio de Celeridad y Economía Procesal.....	19
CAPITULO II.....	21
2.1 Planteamiento del Problema.....	21
2.1.1 Descripción de la Realidad Problemática.....	21
2.1.2 Definición del Problema.....	23
2.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación.....	25
2.2.1 Finalidad.....	25

2.2.2 Objetivo General y Específicos.....	25
2.2.2.1 Objetivo General	25
2.2.2.2 Objetivos Específicos.....	25
2.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación.....	26
2.2.1 Finalidad.....	26
2.2.2 Objetivo General y Específicos.....	26
2.2.2.1 Objetivo General.....	26
2.2.2.2 Objetivos Específicos.....	26
2.2.3 Delimitación del estudio.....	27
2.2.3.1 Delimitación Temporal.....	27
2.2.3.2 Delimitación Espacial:	27
2.2.3.3 Delimitación Social:	27
2.2.4 Justificación e importancia del estudio:	27
2.2.4.1 Justificación Teórica.....	28
2.2.4.2 Justificación Práctica.....	28
2.2.4.3 Justificación Social:	28
2.3 Hipótesis.....	28
2.3.1 Supuestos teóricos.....	28
2.3.2 Hipótesis Principal y Especificaciones.....	29
2.3.2.1 Hipótesis Principal.....	29
2.3.2.2 Especificaciones.....	29
CAPITULO III.....	30
3.1 Conclusión y Recomendaciones.....	30
BIBLIOGRAFÍA.....33ANEXOS.....	35

ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL PLAZO MAXIMO EN LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

MOISÉS BARRAZA FLORES

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

RESUMEN

En la presente investigación se analiza el excesivo plazo que determina la Casación 599-2018 Lima, estableciendo un plazo de hasta 36 meses (3 años) solamente para la primera sub fase, Diligencias Preliminares en los delitos de Organización Criminal, del proceso penal común, que, si añadimos el plazo extremo de la Investigación Preparatoria Formalizada viene a ser un total de hasta 9 años solo en la primera fase.

Esto pues, ha generado bastante controversia en el círculo del derecho procesal, puesto que, no es un plazo razonable para un simple investigado por un supuesto hecho delictivo, y no solo vulnera el derecho a un plazo razonable, sino también, el debido proceso, entre otros.

Palabras clave: proceso penal, diligencias preliminares, organización criminal, plazo razonable, debido proceso.

INTRODUCCION

La presente investigación cuyo título es “Análisis y perspectivas del Plazo máximo en Diligencias Preliminares en los delitos de Organización Criminal”; tiene tres partes: Primero; la etapa del proceso penal común, que, tiene 3 fases, la etapa de la Investigación Preparatoria, la etapa Intermedia, y, por último, la etapa de Juzgamiento.

La primera etapa, se divide en dos sub fases; las Diligencias Preliminares y la Investigación Preparatoria Formalizada. Las diligencias preliminares, consiste en una fase de indignación en la que el fiscal tendría una sospecha inicial de un supuesto hecho delictivo, es decir, desde que el Ministerio Público toma conocimiento del supuesto hecho delictivo, el fiscal apertura las diligencias preliminares, y para esta, tiene un plazo de duración, sin embargo, el Legislador, en el artículo 334° inciso 2 del Nuevo Código Procesal Penal solo ha dado un plazo inicial, añadiendo un plazo de prórroga indeterminada a discreción del fiscal, creando así un vacío legal, empero, a través de diversos pronunciamientos se ha intentado llegar a un plazo extremo exacto.

Asimismo, existen diversos tipos de delitos que el Ministerio Público puede catalogar, los delitos Simples, Complejos, y, los delitos de Organización Criminal. Cada tipo de delito se cataloga dependiendo de la complejidad del caso.

Segundo, la problemática que ha generado esta controversia, no solo por el excesivo plazo que incurre al no ser característico de este nuevo modelo, sino también, a los derechos fundamentales de la persona que se están vulnerando.

Tercero, las conclusiones y a los criterios que ha llegado el autor tras lograr indagar todos los pronunciamientos respecto a este tema.

Es así como, a fecha de hoy, el plazo máximo para los delitos de Organización

Criminal en la sub fase de Diligencias Preliminares es de hasta 36 meses, un plazo no razonable, y, a criterio, exagerado.

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL TEMA

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes Nacionales

- a. Pilco, V (2016). Desnaturalización del plazo de la investigación preliminar en las investigaciones a cargo de la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Moyobamba durante los años 2012-2015. Tesis para optar el título profesional de abogado de la Universidad Nacional de Trujillo TRUJILLO - LA LIBERTAD - PERU.

La tesis consta de 4 capítulos, el primero, abordando el tema de análisis sobre la aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en los plazos de las Diligencias Preliminares por parte de los representantes del Ministerio Público; el segundo, es Diligencias Preliminares constituyen una etapa Prejurisdiccional en la que sólo se realizan actos procesales de carácter inmediato; mientras que, el tercero, es la aplicación del plazo razonable; la cuarta y última nos habla de prorrogar de manera consecutiva el plazo de las diligencias preliminares para realizar diligencias que no son de carácter urgente e inaplazable.

- b. Vargas, T (2014). El plazo razonable en la prórroga de la investigación preliminar. Tesis para optar el título profesional de abogado en la Universidad San Luis Gonzaga -ICA-ICA-PERU.

La tesis consta de 5 capítulos: en el primer capítulo se desarrolla el tema del proceso penal; en el segundo: la investigación preliminar en el proceso penal; en el tercero: el plazo en la investigación preliminar; en el cuarto: el principio del plazo razonable en el proceso penal peruano; mientras que, en el quinto y último capítulo: derecho procesal comparado.

- c. Mercado, M (2018). Derecho a plazo razonable de la investigación preliminar según actuación del investigado y fiscal de delitos contra la administración pública Puno 2017. Tesis para optar el grado académico de maestría en derecho en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez –JULIACA – PUNO - PERU.

La tesis consta de 12 capítulos: el primer capítulo se desarrolla el tema: fundamento constitucional para el derecho penal; el segundo capítulo desarrolla: etapas del código procesal penal en el Perú; el tercero desarrolla: código procesal en el Perú; el cuarto capítulo desarrolla: el derecho procesal penal y sus etapas; el quinto capítulo desarrolla: etapa preliminar; el sexto capítulo desarrolla: principios de la investigación preliminar y preparatoria; el séptimo capítulo desarrolla: características de la investigación preliminar; el octavo capítulo desarrolla: diligencias dentro de la investigación preliminar; el noveno capítulo desarrolla: plazo razonable en el derecho penal; el décimo capítulo desarrolla: criterios para determinar el plazo razonable; el décimo primer capítulo desarrolla: el plazo razonable como garantía judicial; y, el décimo segundo capítulo desarrolla: derecho al plazo razonable en los instrumentos internacionales.

1.1.2 Antecedentes Internacionales:

- a. Sánchez, S (2010). La reserva de la indagación previa y el debido proceso como garantía constitucional en el procedimiento penal ecuatoriano. Tesis para la obtención de título de diplomado superior en derecho procesal penal -CUENCA-ECUADOR.

La tesis consta de 3 capítulos: el primer capítulo desarrolla: la indagación previa; el segundo capítulo desarrolla: el debido proceso; el tercer y último capítulo desarrolla el tema: la fiscalía en la investigación previa.

- b. Pedraza J, (2011). Finalidades de la indagación penal en Colombia. Artículo de la página de internet “derechopenalonline”. COLOMBIA.

Este artículo consta de 4 partes: la primera desarrolla: la fase de indagación en el sistema penal acusatorio; la segunda desarrolla: Finalidad trascendente de la fase de indagación: la comprobación de que el hecho investigado reviste las características de delito; la tercera desarrolla: Identificación del autor o partícipe de la conducta típica materia de indagación; la cuarta y última desarrolla: Procedencia procesal de la acción penal.

1.2 Marco Conceptual

1.2.1 Proceso Penal:

Definición: Se entiende por “proceso” a las actividades de manera secuencial donde figuran diversas personas, en un proceso penal, estas personas tienen una controversia, donde existe un presunto culpable o investigado, y, un presunto agraviado, que viene a ser la persona natural o jurídica que ha sufrido el daño; el proceso penal es un transcurso jurídico dividido en distintas etapas en el que existen diferentes partes procesales: el imputado, representante del Ministerio Público, agraviado, víctima, tercero civil, actor civil; en el cual, uno de los objetivos es el buscar la verdad sobre el hecho ilícito cometido, y, saber quién es el/los responsables del mismo para sancionar el delito (dependiendo del caso).

Existe el llamado “Nuevo Código Procesal Penal” (NCPP) del 2004 (Decreto Legislativo 957), se dice “nuevo” porque recientemente ha sido implementado en su totalidad en todo el territorio nacional, puesto que, anteriormente se usaba el Código de Procedimientos Penales de 1940 (Ley N°9024); desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal han surgido y siguen surgiendo infinidad de vacíos o inquietudes sobre su aplicación que, a lo largo del tiempo se han intentado “llenar” con diversos pronunciamientos (acuerdos plenarios, casaciones, sentencias vinculantes, etc.).

1.2.2 Etapas del Proceso Penal Común:

Como se mencionó líneas arriba, el proceso penal común consta de diversas etapas que funcionan de manera secuencial donde cada una tiene distintas finalidades y procedimientos que son, la Investigación Preparatoria, la Etapa Intermedia y Juzgamiento:

- a. Investigación Preparatoria: Es la primera etapa del proceso, es la etapa indagatoria, donde el representante del Ministerio Público, al conocer el supuesto hecho delictivo empieza a realizar las investigaciones correspondientes, empero, esta etapa está dividida en dos sub – etapas, las Diligencias Preliminares y la Investigación Preparatoria Formalizada.
- Diligencias Preliminares: Es la primera sub etapa de la Investigación Preparatoria, el Ministerio Público de oficio o de parte (denuncia ante comisaria o presentada ante la fiscalía competente), toma conocimiento del presunto hecho ilícito contemplado en el Código Penal vigente (excepto los delitos contra el honor), y, califica la denuncia para posteriormente empezar con las indagaciones. Esta sub etapa culmina cuando el representante del Ministerio Público archiva el caso, o de lo contrario, formaliza la denuncia ante el Juzgado competente, es decir, judicializa el proceso porque a su criterio, si existe el hecho delictivo. Teniendo en cuenta que el presente trabajo es sobre esta sub etapa, se hace una definición más extensa en el punto 1.2.3.
 - Investigación Preparatoria Formalizada: Después de que se formaliza la denuncia empieza la segunda sub etapa de la Investigación Preparatoria, en la que el Ministerio Público tiene un plazo mas extenso para poder realizar sus investigaciones, obtiene más medidas de coerción personal y real (como es la prisión preventiva, entre otras medidas), y, esta sub etapa culmina cuando el fiscal sobresee o acusa, es decir, el titular de la acción penal para poder sobreseer (archivar) debe de solicitarlo al Juez mediante escrito para una posterior audiencia; y, para acusar, también es mediante escrito, en esta audiencia empieza la segunda etapa en el proceso penal común, la etapa intermedia.
- b. Etapa Intermedia: Empieza con la solicitud del Ministerio Público, que puede ser Requerimiento Acusatorio, Requerimiento de Sobreseimiento o Requerimiento Mixto (de diversos acusados sobreseer a algunos o de diversos delitos absolver algunos), para llevar a cabo la audiencia respectiva, conocida como “el control de acusación”, es una especie de filtro o como se denomina en el proceso civil “saneamiento procesal” donde el mismo Juez de la etapa

anterior verifica si el requerimiento debe pasar a Juicio Oral, o de lo contrario, sobreseerlo.

- c. Juzgamiento o Juicio Oral: Es la última etapa del proceso penal común, donde el que revisa el caso es un juez o colegiado distinto al de las etapas iniciales, puesto que, para resolver no tiene que haber conocimiento de lo actuado anteriormente, sino, en su fase decisoria; esta etapa culmina con la sentencia, ya sea condenatoria (en su modalidad de formas) o absolutoria; sin perjuicio de ello, la parte afectada ante la resolución tiene el derecho de impugnar.

En el Código de Procedimientos Penales de 1940, el Ministerio Público reúne los actos que ha recabado la Policía Nacional y si considera que se debe aperturar instrucción, formaliza la denuncia ante el juzgado competente, teniendo la formalización los datos del o los imputados, datos del agraviado, fundamentación fáctica, fundamentación jurídica, diligencias actuadas, medidas de coerción real y/o personal (de ser el caso), y, las diligencias a actuarse en sede judicial, es decir, las investigaciones pasan a realizarse en el juzgado, como son las declaraciones (instructivas, preventivas, testimoniales, etc.), recabar antecedentes, oficiar a entidades públicas o privadas para recabar información, etc. si el Juez considera que se debe abrir instrucción, emite el Auto Apertorio de Instrucción por un plazo de investigación de 90 días (sumario) o 120 días (ordinario), dependiendo de la complejidad del caso.

1.2.3 Diligencias Preliminares:

Definición: Es la sub etapa de la primera etapa del proceso penal común, donde el Ministerio Público toma conocimiento del supuesto hecho delictivo, por denuncia de parte, es decir, la parte agraviada presenta la denuncia ante la comisaria o ante la fiscalía correspondiente y/o denuncia de oficio, toma conocimiento por sus propios medios o por ser un hecho mediático. El o los imputados, en caso no fueran identificados inicialmente, se investiga a los que resulten responsables (LQRR); el ministerio publico toma conocimiento del supuesto acto ilícito y empieza sus indagaciones; actuaciones que tienen un plazo de hasta 60 días (art. 334.2 del NCPP) prorrogables a discreción del fiscal, en este plazo debe indagar los supuestos hechos ilícitos, como dice el NCPP estas investigaciones son de carácter urgentes e

inaplazables, por ejemplo, si ocurre un homicidio, el fiscal de turno acude con su equipo (ej. peritos) y facultativamente con la Policía Nacional del Perú al punto de los hechos para las indagaciones correspondientes como lo son, aislar el lugar, cercarlo, tomar las huellas dactilares, fotos, etc. Es decir, actuaciones que son netamente urgentes y que no pueden ser inaplazables, en buen romance, no puede hacerse estas investigaciones al pasar los días, puesto que, siguiendo el ejemplo anterior, el lugar de los hechos podría ser alterado.

Los casos se clasifican en tres, delitos simples, delitos complejos, y por último, organización criminal; inicialmente y normalmente los casos se califican como “simples”, sin embargo, el artículo 342.3 del NCPP menciona la distinción para que se califiquen o pasen de simple a “complejo”; “...a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucre una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucre llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma”. Para la Organización Criminal o Crimen Organizado, existe la Ley N°30077, donde definen qué es una organización criminal, las características y los plazos de investigación, pero, plazos en la etapa de la Investigación Preparatoria Formalizada, los plazos en diligencias preliminares quedan en vacío; este concepto de la criminalidad organizada, se va a detallar en el punto 1.2.4.

Esta sub etapa de la Investigación Preparatoria, Diligencias Preliminares, culmina cuando a criterio del fiscal el caso (carpeta) se archive o formalice, mediante una Disposición Fiscal; si la formaliza, la disposición deberá contener la identificación del investigado (nombre completo), los fundamentos de hecho y fundamentos de derecho (tipificación específica), el nombre del agraviado (si fuera posible), y, las actuaciones a realizarse en el plazo de investigación que tiene la investigación preparatoria formalizada, que, viene a ser 120 días ampliables a 60 días más. Si la archiva y la parte agraviada se ve afectada con esta decisión, tiene la posibilidad de interponer recurso de queja en el plazo legal de 3 días hábiles después de la

notificación, este recurso se eleva a la fiscalía superior competente para que revoque o confirme, asimismo, también podría designar a otro fiscal para que lleve las indagaciones correspondientes.

1.2.3.1 El Plazo de la Investigación Preliminar

En el código de procedimientos penales de 1940, no estaba plasmado un plazo fijo, el fiscal formalizaba cuando creyera conveniente; asimismo, no existían mecanismos por parte de la defensa para impulsar o dar celeridad a las investigaciones.

El plazo que ha sugerido el Código Procesal Penal del 2004, en su artículo 334.2 menciona que: *“...El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3°, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante, ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación...”* Hay que tener en cuenta que, inicialmente el plazo era de 20 días, sin embargo, con la modificatoria en la Ley N°30076 el plazo varió a 60 días. El plazo inicial sería de 60 días y el titular de la acción penal tiene la potestad de variar el plazo dependiendo de la complejidad del caso, evidentemente es una definición muy ambigua en cuanto al cómputo del plazo.

Existen diversos pronunciamientos sobre este tema, hay una “evolución jurisprudencial” donde se ha intentado fijar un plazo exacto para esta sub etapa.

Según la casación 66-2010 Puno, en su considerando sexto, menciona que el inicio del cómputo del plazo de las Diligencias Preliminares se inicia a partir de que el fiscal toma conocimiento del supuesto hecho delictivo y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra; asimismo, esta casación también expresa que los plazos para las diligencias preliminares serían de días naturales y no hábiles. Existía confusión en cuanto al inicio, puesto que, otras opciones podrían ser, desde el hecho delictivo, desde que el fiscal conoce el delito, desde que se interpone la denuncia, desde que se inician las investigaciones, o, desde que el imputado conoce (notificado) que está siendo investigado.

La casación 02-2008 La Libertad, menciona que el plazo máximo es de 120 días en total, empero lo más destacable de esta pronunciación es que los plazos de las diligencias preliminares deben de ser distintos a los plazos de la investigación preparatoria formalizada, en su considerando *décimo segundo* expresa que, *“la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria”*. Y es lógico, puesto que, la característica de las diligencias preliminares son recabar los actos de investigación más urgentes e inaplazables, incluso no estaría identificado aun al investigado en esta sub fase, sin embargo, en la investigación preparatoria formalizada, ya están identificadas las partes e incluso ya se tipifica el supuesto delito; es por ello que, y, teniendo en cuenta estas características, las diligencias preliminares tiene un plazo menor al de la investigación preparatoria formalizada (la siguiente sub fase).

Hay que tener en cuenta que estas investigaciones son de carácter inmediato, tal y como menciona el código, es por ello que la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a las características y finalidades de las diligencias preliminares en la casación 318-2011 Lima en su considerando 2.8, i) realizar actos urgentes solo para determinar si los hechos denunciados son reales y si además configuran uno o varios ilícitos penalmente perseguibles; ii) asegurar la escena del crimen y la evidencia sensible de la presunta comisión del ilícito, y evitar en lo posible mayores consecuencias derivadas de la perpetración del delito; e iii) individualizar al presunto imputado fundamentalmente y al agraviado si es posible.

La casación 528-2018 Nacional hace alusión al significado de “urgentes e inaplazables”, en su considerando *cuarto* mencionando que es de naturaleza inmediata, que en la mayoría de casos es a la actuación pronta del representante del Ministerio Público o la PNP, con el fin de acudir al lugar del supuesto hecho delictivo y establecer la realidad del evento delictivo o impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores o se altere la escena del hecho criminal o recoger los elementos probatorios del lugar; asimismo, tales circunstancias no pueden limitar la categorización de actos urgentes e inaplazables en estricto a un sentido temporal, pues no todos los delitos dejan huellas permanentes, algunos las ofrecen de manera transeúnte y otros no dejan rastros o no producen efectos materiales o los que había podrían desaparecer.

1.2.3.2 Plazo Prorrogable adicional a la ordinaria:

En la etapa indagatoria, se cuenta con un plazo de sesenta días, que, cumplido el plazo, el representante del Ministerio Público, adicionara un plazo “razonable” con el objetivo de culminar los actos de investigación que le faltara para poder formalizar, archivar, principio de oportunidad, o incluso, acusación directa.

Las investigaciones en sede fiscal, se dividen en tres tipos, simples, complejos y crimen organizado; con la casación 144-2012 Ancash, se fijó que el plazo máximo de diligencias preliminares para casos complejos es de 8 meses, asimismo, en su considerando *decimo* aclara las características que deberían de tener la investigación para ser identificado como un “caso complejo” a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados os agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaboradores de bandas u organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; o, g) deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades el Estado. Con esta distinción, el plazo inicial de casos complejos sería de 60 días ampliables hasta 8 meses.

La casación 134-2012 Ancash expresa que una vez vencido el plazo de investigación fijado por el Fiscal, este plazo no es prorrogable, puesto que, el vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer; frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación, no corresponde el amparo de solicitudes de prórroga del mismo; en el caso del vencimiento del plazo de las diligencias preliminares, el representante del ministerio público debe proceder a formalizar o archivar.

La casación por lo cual es tema de controversia en la presente investigación, es la casación 599-2018 Lima donde, el plazo máximo de diligencias preliminares en delitos tipificados como Organización Criminal, es inicialmente de 60 días prorrogables hasta 36 meses (3 años).

Finalmente, los plazos iniciales y prorrogables de las diligencias preliminares para los casos simples, complejos y de organización criminal son los siguientes:

CASO	PLAZO LEGAL	PLAZO JURISPRUDENCIAL
SIMPLE	El plazo de las diligencias preliminares es de 60 días (...) No obstante, el fiscal podrá fijar un plazo distinto.	Max. 120 días
COMPLEJO		Max. 8 meses
CRIMEN ORGANIZADO		Max. 36 meses

1.2.4 Organización Criminal:

1.2.4.1 Definición y características de una organización criminal

Se entiende por “organización” a un número de personas que buscan un mismo objetivo, mientras que criminal o crimen, está implicado a un delito de mayor grado; siendo así, una Organización Criminal vendría a ser un grupo de personas que tienen como fin el realizar actos ilícitos para generar algún bien económico (en su mayoría de casos). Asimismo, como una empresa, tiene un modelo jerárquico en donde cada uno de sus miembros tienen sus roles.

Por su parte, en la convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional asume que esta forma de criminalidad está caracterizada por la existencia de un grupo estructurado de 3 ó más personas, que existe durante cierto tiempo, para cometer uno o más delitos graves, a fin de obtener un beneficio económico o material.

Para el jurista y fiscal provincial Titular, Marcial Eloy Paucar Chappa, denomina a la Criminalidad Organizada: *“es el desarrollo permanente, dinámico y evolutivo de actividades ilegales tanto locales como de proyección internacional, a través de estructuras organizacionales jerárquicas o flexibles que tiene como objetivos principales la búsqueda de consolidar una posición económica y/o de poder, por medio de diversos mecanismos como la violencia, la influencia, la tecnología, etc.”* (Marcial Eloy Paucar Chappa. El Delito de Organización Criminal. IDEAS. Lima, 2016, p.154.).

Asimismo, para el jurista y Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga, define a la Criminalidad Organizada de la siguiente manera: *“es toda actividad delictiva que ejecuta una organización de estructura jerárquica o flexible, dedicada de manera continua o permanente a la provisión y comercio de bienes, medios o servicios legalmente restringidos, de expendio fiscalizado o de circulación prohibida, los cuales cuentan con una demanda social interna o internacional, potencial o activa, pero siempre en crecimiento. Además, estas actividades criminales se reproducen y extienden aplicando una eficiente dinámica funcional de abuso, inserción, o gestión de posiciones, expectantes o consolidadas, de poder político, económico o tecnológico”*. (Víctor Prado Saldarriaga. Criminalidad organizada y Lavado de Activos. IDEMSA. Lima, 2013, p.60.).

1.2.4.2 La Convención de Palermo y la Delincuencia Organizada:

El documento base de nuestra legislación es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo). Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre del 2000, en Palermo (Italia), ratificada por el Estado Peruano el 19 de noviembre del 2001 (Decreto Supremo N.º 88-2001-RE), vigente desde el 29 de septiembre del año 2003.

En su primer artículo, la Convención de Palermo prescribe que su finalidad es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Según la Convención, por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Los protocolos de la Convención de Palermo son los siguientes:

- a) Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

b) Protocolo de las Naciones Unidas contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire.

c) Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.

La Convención y los protocolos están bajo la jurisdicción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés United Nations Office on Drugs and Crime).

1.2.4.3 Ley N°30077:

La Ley Contra el Crimen Organizado, Ley N°30077 fue promulgada un 20 de agosto del 2013, en ella se menciona el objeto de la ley, definición, los delitos comprendidos son 21 (Homicidio calificado, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio art. 186°, 189°, 195°, 196-A° y 197°, pornografía infantil, extorsión, usurpación art. 202° y 204°, delitos informáticos art. 207-B y 207-C, delitos contra la propiedad industria, delitos monetarios art.252°, 253° y 254°, tenencia ilegal de armas art. 279°, 279-A°, 279-B°, 279-C° y 279-D°, delitos contra la salud publica art. 294-A° y 294-B°, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes art. 303-A° y 303-B°, delitos ambientales art. 310-A°, 310-B y 310-C°, delito de marcaje, genocidio art. 319°, 320° y 321°, delitos contra la administración publica art. 382°, 383°, 384°, 387°, 393°, 393-A°, 394°, 395°, 396°, 397°, 397-A°, 398°, 399°, 400° y 401°, delito de falsificación de documentos, y, delito de lavado de activos en sus artículos 1,2,3,4,5 y 6 del decreto legislativo N°1106.). El ámbito de aplicación, el proceso, la investigación, plazos, entre las más importantes distinciones de la presente ley. No se hace una citación de los artículos de la Ley N°30077 para no caer en plagio en la presente investigación.

Cabe destacar que, el plazo para los delitos tipificados como Organización Criminal en la sub fase de Investigación Preparatoria Formalizada es de 36 meses, prorrogables hasta 36 meses más, es decir, un total de 6 años; asimismo, en esta norma no se especifican los plazos para la sub fase de las diligencias preliminares.

Otra característica es la definición en su artículo 2°, que menciona, “se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura...”, en esta parte

de la definición da las características que debe tener una organización criminal para tipificarlo como tal; asimismo, en el inciso 2 del artículo 2° expresa que, “los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo...”, en este inciso resalta que, no necesariamente se debe pertenecer al grupo vinculado al crimen, sino, con solo tener un vínculo es necesario para su tipificación o por lo menos para coger la parte procesal de la norma (caso Oviedo Pichotito).

1.2.4.4 El Crimen Organizado en el proceso penal:

En el Perú, el crimen organizado es un agravante del tipo penal de los delitos que están expresados en la Ley 30077, es decir, si se comete el delito de secuestro (ya teniendo sus características y su pena en el artículo 152° del Código Penal) entre 3 o más personas con el objetivo de obtener un bien material o económico, y, usar las ganancias para crecer como organización, se estaría agravando el secuestro con la organización criminal.

Actualmente, existen entidades estatales específicamente especiales para este tipo de agravante, como lo son los juzgados especializados en crimen organizado y las fiscalías especializadas en crimen organizado, puesto que, realizar las investigaciones y decisiones para este tipo de casos son bastante complejas, por lo que hay que tener un equipo preparado para la celeridad de estos procesos, teniendo en cuenta que, en alguno de los casos son investigaciones dentro y fuera del territorio nacional; y por ello, suelen dar plazos para las investigaciones extensas, no solo para las investigaciones, sino también para emitir algún pronunciamiento judicial.

Existen diversos mecanismos de investigación para este tipo de delitos, como lo son, el levantamiento del secreto bancario, acciones de seguimiento, agente encubierto, el levantamiento del registro de comunicaciones (registro de llamadas o registro del celular), intervenciones fuera del país, entre otros.

1.2.5 El Debido Proceso:

El debido proceso está contemplado en nuestra Carta Magna en el artículo 139 inciso 3, “*la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional*”, es por ello que, al estar expresado en nuestra constitución de 1993, el debido proceso es un derecho fundamental de la persona.

En el proceso penal, el debido proceso es un conjunto de garantías procesales y penales que se deben respetar al imputado desde la etapa indagatoria hasta la etapa de ejecución, el Estado, como titular del derecho punitivo, es el protagonista y encargado de esta garantía, observando que se lleve a cabo un proceso justo y sin la vulneración de ningún derecho hacia el imputado.

En el debido proceso se encuentran comprendidos una serie de derechos o garantías procesales, entre los más resaltantes en un proceso penal sería, la presunción de inocencia, el juez imparcial, igualdad de armas, ser investigado en un plazo razonable, pluralidad de instancias, entre otras; todas estas garantías procesales forman parte de los derechos fundamentales de la persona en un proceso penal.

Según define Julián Pérez Porto, el debido proceso, es un principio general del derecho, que establece que el Estado, tiene la obligación de respetar la totalidad de los derechos que la ley reconoce a cada individuo.

Según precisa, el debido proceso, en este marco es el principio que garantiza que cada persona, disponga de determinadas garantías mínimas para el resultado de un proceso judicial transparente, toda vez que el imputado tiene derecho a nombrar un abogado de su libre elección y si no tiene se le nombrará un abogado público y además será escuchado por el Juez o también puede ejercer su derecho constitucional a guardar silencio.

1.2.6 El Plazo Razonable

Se entiende como “plazo” al tiempo señalado para realizar algo, y, a la palabra “razonable” a algo que es suficiente en cantidad o en calidad; por lo tanto, una definición casi exacta del Plazo Razonable es un tiempo justo y sin vulnerar derechos de la persona para ser investigado, o, el tiempo ideal para que una persona este dentro de un proceso desde el inicio hasta el fin, es decir hasta que se emita una sentencia (dependiendo del caso).

Asimismo, hay que hacer una diferenciación entre plazo razonable con el plazo legal, a pesar de que el plazo legal ha sido establecido legalmente, el plazo legal puede incluso hasta vulnerar al plazo razonable. El plazo legal es el plazo establecido exacto expresado en la norma, que tiene o tendrían las partes para producir un efecto jurídico.

El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia en el Expediente N°1535-2015-PHC/TC en su considerando tercero menciona que “...*el plazo de un proceso o un procedimiento será razonable solo si es que aquel comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses...*”; se entiende pues, que el lapso de tiempo utilizado para las investigaciones a un procesado, debe de ser el tiempo suficiente, es decir, una cantidad adecuada de tiempo, sin sobrar para lo que se necesita.

Así pues, el plazo razonable es un derecho fundamental de la persona, el TC peruano, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Corte IDH, ha establecido que el derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación implícita” del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana. Así, el principio del plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurare que ésta se decida prontamente.

1.2.7 El Control de Plazo:

En el Código de Procedimientos Penales de 1940, norma que no es la vigente, sin embargo, en los juzgados penales competentes algunos expedientes aún están en calificación, tramite y ejecución, y por ello, estos juzgados lo están liquidando (de ahí el nombre “juzgado penal liquidador”), empero, previo a que el fiscal competente formalice y pida la apertura de instrucción; al tomar conocimiento del supuesto hecho delictivo, realizaba las siguientes indagaciones: reunía los medios probatorios necesarios, notificaba a las partes, recogía las declaraciones de la PNP, etc. en un tiempo indeterminado, siempre y cuando no se prescribiera la acción penal, en el peor de los casos, formalizaba cuando este prescribiera. Es así que, en este antiguo modelo al no tener un plazo determinado para las indagaciones antes de formalizarla, la idea de un nuevo modelo era tener mayor celeridad en las investigaciones preliminares y en un plazo determinado, para así, no caer en error para que el representante del Ministerio Público se pase por un largo periodo realizando estas investigaciones.

Por estos motivos, en el nuevo modelo existe un control para que se respeten estos plazos, el Control de Plazo, expresado en el Código Procesal Penal en el artículo 343°, donde se menciona que, las partes, agraviado o imputado, al término del plazo legal permitido, pueden solicitar al juez competente el término de la investigación (ya sea en diligencias preliminares o en investigación preparatoria formalizada), y, el juez citará al fiscal y las demás partes a la audiencia de control de plazo, finalizando esta y después de recabar lo que dicen las partes en audiencia, emitirá la resolución correspondiente. Si el juez ordena que se culmine el plazo de la investigación, el representante del Ministerio Público, en un plazo de 10 días tendrá q pronunciarse según corresponda, para formalizar o archivar en diligencias preliminares o sobreseer o acusar en la formalizada.

1.2.8 Principio de Celeridad y Economía Procesal:

La finalidad de un proceso (cualquiera que sea la rama) es resolver un conflicto entre ambas partes mediante un método eficaz.

El principio de celeridad procesal ha sido definido por Monroy Gálvez como aquel que se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho transcendente e indiscutible es que una justicia tardía no es justicia. Para ratificar esta concepción, el sistema publicístico busca proveer a los justiciables, a través de las instituciones reguladas, de una justicia rápida. Si es buena o mala, esta calidad será responsabilidad de todos sus protagonistas.

Por su parte el principio de economía procesal tiene manifestaciones en ahorro a tres niveles distintos, pero fuertemente vinculados a propósito del proceso. En primer lugar, un ahorro de tiempo evidentemente, vale decir "ni tan lento que parezca inmovilidad ni tan expeditivo que se renuncie al cumplimiento de formalidades indispensables, es la expresión adecuada de este principio.

En la práctica, se emiten resoluciones por entidades estatales donde por ejemplo se prescinde de notificación por celeridad y economía procesal, en un ejemplo más exacto, en los juzgados se emiten resoluciones donde no hace falta la notificación a las partes, puesto que, es una resolución donde las actuaciones son

internas; ya que, si este tipo de resoluciones se notifican, el proceso pierde su característica, la celeridad procesal.

CAPITULO II

2.1 Planteamiento del Problema

2.1.1 Descripción de la Realidad Problemática:

Las Diligencias Preliminares es una sub fase del Proceso Penal común en la actualidad, es por ello que a lo largo de su pequeña historia ha obtenido diversos cambios en todo aspecto, en esta investigación solo indagaremos con respecto a su metamorfosis en cuanto a sus plazos.

En el Perú, con el Decreto Legislativo N°957, se aprobó el Nuevo Código Procesal Penal, promulgado el 22 de julio del año 2004 y publicado el 29 de julio del mismo año. En este nuevo modelo, a diferencia del anterior -Código de Procedimientos Penales de 1940-, resultaría más célere, puesto que, en el Código de 1940 no se regulaban plazos específicos. (ver caso “Chacón Málaga”, entre 8 a 9 años de investigación solo en la primera etapa, que, a través de un Habeas Corpus, el Tribunal Constitucional se pronunció excluyéndolo del caso por un excesivo tiempo a un investigado).

Es así como, en este nuevo modelo, el Proceso Penal común está conformado por tres etapas en las que cada una tiene una función y finalidad distinta; la primera etapa, es la etapa de la Investigación Preparatoria, la segunda es la etapa Intermedia, y, por último, el Juzgamiento o también llamado Juicio Oral.

La etapa de la Investigación Preparatoria tiene dos sub- divisiones, las Diligencias Preliminares, y culminado esta, la Investigación Preparatoria Formalizada.

1era. ETAPA: INVESTIGACIÓN PREPARATORIA		2da. ETAPA: INTERMEDIA	3era. ETAPA: JUICIO ORALO JUZGAMIENTO
Diligencias Preliminares	Investigación Preparatoria Formalizada		

El artículo 334 inciso 2 del Nuevo Código Procesal Penal expresa que el plazo de las Diligencias Preliminares actualmente es de sesenta (60) días prorrogables, la prolongación es a criterio del fiscal dependiendo de la complejidad del caso (ver supuestos en casación 144-2012 Ancash).

Encontrando así, un vacío legal, como se ha mencionado líneas arriba, el legislador no ha dado un plazo exacto sobre la prolongación de las diligencias preliminares, la norma solo nos dice Art. 334 inciso 2 del CPP que: *“...El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3°, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante, ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación...”*

En nuestro país, existe una variedad de casos “emblemáticos” de los cuales con el pasar de los días surgen infinidad de pronunciamientos, es por esto que, a través del caso “Fuerza Popular” se emitió la Casación N°599-2018 Lima, en la que se dispuso que el plazo máximo para las diligencias preliminares en delitos de Organización Criminal sería de hasta 36 meses (3 años). En forma reducida y objetiva menciono a continuación como se ha llegado a “solucionar” este vacío a través de diversos pronunciamientos:

- Casos Simples 60 días hasta 120.
- Casos Complejos hasta 8 meses.
- Casos de Crimen Organizado hasta 36 meses.

Teniendo esta problemática, entendemos -según la norma- que las Diligencias Preliminares tienen por finalidad realizar actos *urgentes o inaplazables*, pues consideramos que no es dable este plazo, puesto que, qué tipo de actos con carácter de urgencia o impostergables se podrían realizar en hasta 36 meses -para el caso de Crimen Organizado-

En las fiscalías especializadas contra el Crimen Organizado, al ser una Fiscalía especializada precisamente en delitos de organización criminal no es la excepción para aprovechar este plazo y prolongarlos -en su mayoría de casos- hasta los 36 meses, puesto que, si bien es cierto, el Ministerio Público tiene la potestad de ampliarlo hasta dicho plazo sin necesidad de recurrir a un Juez, ya que en esta sub

etapa solo se tiene como finalidad recabar los suficientes medios probatorios en el menor tiempo posible para luego formalizarla, y el Juez recién aparecería en la siguiente subetapa, en la Investigación Preparatoria Formalizada. Empero estos 3 años de duración de las diligencias preliminares es excesiva, a mi juicio, se vulneran los derechos fundamentales de la persona, afecta el mismo debido proceso, teniendo en cuenta que la siguiente sub etapa -la formalizada- consta de 36 meses ampliables hasta otros 36 meses más, sumando un total de 9 años de investigación. Así es el plazo de Crimen organizado actualmente:

Diligencias Preliminares: hasta 36 meses.

Investigación Preparatoria Formalizada: 36 meses prorrogables hasta otros 36 meses.

Total, de la etapa Investigación Preparatoria en delitos de Crimen

Organizado: Hasta 9 años; sin tener en cuenta aun el tiempo en que se podría tardar las siguientes etapas, la Intermedia y Juzgamiento.

1.INV. PREPARATORIA		2.INTERMEDIA	3.JUZGAMIENTO
Diligencias Preliminares	Inv. Preparatoria Formalizada		
- <u>Casos Simples:</u> 60d+60d	- <u>Casos Simples:</u> 120d+60d		
- <u>Casos Complejos:</u> 60 – 8M	- <u>Casos Complejos:</u> 8M+8M		
- <u>Org. Criminal:</u> Hasta 36M	- <u>Org. Criminal:</u> 36M+36M		
TOTAL: Hasta 9 años en Crimen Organizado.			

2.1.2 Definición del Problema

La problemática es, que la duración del plazo máximo en diligencias preliminares para los delitos con agravantes de crimen organizado es excesiva, el

error de la Corte Suprema es que hace una analogía de la Ley N°30077 (ley de crimen organizado) para coger la parte procesal en cuanto a los plazos, puesto que, en esta ley en mención solo especifican los plazos de crimen organizado en la sub fase de la Investigación Preparatoria Formalizada, en su artículo 342 inciso 2, *“el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria”*.

Este plazo afectaría el Principio del Debido Proceso, puesto que, la finalidad del nuevo modelo del código procesal penal es, en teoría, más célere, pues, en el antiguo código no existía plazo definido para la etapa indagatoria, recién aparecía plazos en la etapa de instrucción, sin embargo, estos plazos en etapa instructiva no se respetaban porque no existía un control de plazo, el control de plazo se interpone para que el representante del Ministerio Público archive o formalice (en diligencias preliminares) o, acuse o sobresea (en la investigación preparatoria formalizada) una vez haya terminado el plazo legal de su investigación. También, se dice que afectaría este principio porque el procesado debe de ser justiciado en un tiempo de investigación por el cual todo proceso debe iniciarse y concluirse en la necesaria observancia y respeto (artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú).

Otro derecho fundamental que afecta, a criterio del autor, es el plazo razonable, el Tribunal Constitucional hace mención en el Expediente N°295-2012-PHC/TC que, *“El plazo de un proceso o un procedimiento será razonable sólo si es que aquél comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes.”* Se entiende que, debe de efectuarse un plazo prudente del proceso, en todo caso, volveríamos al pasado con el antiguo código, donde las indagaciones en esta sub fase (haciendo una analogía) eran aproximadamente de 3 a 4 años, como se dijo líneas arriba, existe una jurisprudencia de la sentencia del tribunal constitucional del caso “Chacón Málaga”, donde se menciona que un procesado no puede estar siendo investigado por un tiempo muy prolongado.

Así pues, 36 meses es un tiempo excesivo para realizar las indagaciones correspondientes, teniendo en cuenta que, en esta sub fase solo hace falta identificar

al presunto responsable para poder formalizar la investigación donde el representante de la legalidad a través de su Disposición Fiscal, recurre al Juez competente para pasar a la siguiente sub etapa.

La ética y la moral de la persona, se considera estos como principios fundamentales de toda persona, el mero hecho de ser investigado en un tiempo prolongado no es cómodo, afecta a la persona, en estos años el investigado tendría que -si es que la fiscalía competente si realiza investigaciones- recibir notificaciones como imputado, realizar declaraciones, volver a recibir notificaciones y volver a realizar declaraciones, puesto que, lo habitual es que no se den estas investigaciones al principio por diversos motivos; asimismo, en este lapso de tiempo, la persona investigada estaría en el sistema fiscal registrado como imputado, afectando -por el momento- el Principio de Presunción de inocencia.

2.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación

2.2.1 Finalidad

La finalidad de la presente investigación es realizar una critica al plazo de diligencias preliminares en crimen organizado, dando a notar los diversos derechos fundamentales de la persona que se afectan, como lo son, el debido proceso, plazo razonable, presunción de inocencia, o, mecanismos como el Control de Plazo, entre otros derechos.

Se debería realizar un análisis exhaustivo a la casación N°599-2018 Lima, y, promulgar otro pronunciamiento, ya sea casación, acuerdo plenario, etc. para modificar el plazo máximo en diligencias preliminares para los delitos de organización criminal, así, la finalidad del nuevo modelo procesal penal estaría cumpliendo una de sus metas, que es ser más célere y llegar a la verdad en un tiempo prudencial.

2.2.2 Objetivo General y Específicos

2.2.2.1 Objetivo General:

La fijación de la ampliación máxima (36 meses) de plazo de las diligencias preliminares incide o afecta el derecho a un plazo razonable para los procesos de crimen organizado.

2.2.2.2 Objetivos Específicos

Afecta los derechos fundamentales de la persona el hecho de estar investigado por hasta 36 meses en diligencias preliminares, teniendo en cuenta que aún se está en la primera sub etapa de un proceso penal común.

Afecta el debido proceso este plazo máximo de hasta 36 meses en diligencias preliminares, teniendo en cuenta que aún se está en la primera sub etapa de un proceso penal común.

2.2.3 Delimitación del estudio

2.2.3.1 Delimitación Temporal

Esta problemática surge desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, es decir, desde el 2004. Sin embargo, esta investigación se inicia a partir del año 2020, después de la justificación de la Corte Suprema a través de la casación 599-Lima caso “fuerza popular”.

2.2.3.2 Delimitación Espacial:

La actual investigación se realiza en la jurisdicción de Lima, puesto que, los tipos de delitos que se hace en esta investigación precisamente son de Organización Criminal y observar el plazo ampliable de hasta 36 meses en la sub etapa de diligencias preliminares.

2.2.3.3 Delimitación Social:

Se delimita a todas las personas que se le ha abierto un proceso penal y se encuentre aun en la fiscalía correspondiente, es decir, sin formalizar (sin correr traslado a un juzgado); al estar investigado sin formalizar, se afectan derechos fundamentales tanto de la persona como del mismo debido proceso, como, por ejemplo: el derecho a la dignidad (art. 1 de la constitución política del Perú), el derecho a un plazo razonable, el derecho a un debido proceso, entre otros.

2.2.4 Justificación e importancia del estudio:

Se hace esta investigación ya que, jurídicamente como lo expresa el artículo 334 inciso 2 del nuevo código procesal penal donde el plazo de las diligencias preliminares inicialmente es de 60 días ampliables a discreción del fiscal. Así pues existe un vacío en cuanto al plazo cuando el Ministerio Público a través del fiscal oportuno amplía las diligencias preliminares dependiendo de la complejidad; que

puede ser: simple, complejo y de crimen organizado; esto pues, ha llevado a una serie de pronunciamientos como por ejemplo las Casaciones (002-2004 La Libertad, entre otros).

2.2.4.1 Justificación Teórica:

Justificar teóricamente, habría que exponer que a mi juicio el concepto de Plazo Razonable no existe, por cuanto se estaría vulnerándolo, no solo este derecho, sino también vulneraría el derecho a un debido proceso, y, quizás, otros derechos más que tiene la persona.

2.2.4.2 Justificación Práctica:

Sirve en el campo de derecho Penal, exactamente en la rama procesal penal, puesto que, tiene que ver con la problemática de los plazos y forma del proceso. Desde un punto de vista procesal, el abogado defensor usa como estrategia presionar al Ministerio Público para que éste formalice o archive el caso, es decir, en caso de que el fiscal de turno se le venza el plazo establecido, la defensa puede optar por interponer un Control de Plazo. Sin embargo, el Ministerio Público, también como estrategia y al tener en cuenta que el plazo máximo en organización criminal es hasta 36 meses, coge la parte procesal de la Ley contra el crimen organizado N°30077 sin tipificar el delito como crimen, solamente acogándose al plazo de los 36 meses de la ley.

2.2.4.3 Justificación Social:

Esta problemática afecta, en todo caso, a las personas que están siendo investigadas en un proceso penal, después que el Ministerio Público a través de la fiscalía tiene una “sospecha inicial”, al estar en la sub fase de la investigación preparatoria, -las diligencias preliminares - La afectación se deriva al tiempo transcurrido, puesto que, el hecho de estar investigado en una etapa preliminar por tanto tiempo afectaría su dignidad e imagen como persona.

2.3 Hipótesis

2.3.1 Supuestos teóricos

La Corte Suprema a través de la Casación N°599-2018 Lima, ha realizado una analogía a la Ley contra el Crimen Organizado Ley N°30077 al poner el mismo periodo

inicial de esta, es decir, 36 meses para las investigaciones en fase preliminar; debería realizarse un estudio más a fondo sobre estos plazos, teniendo más en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y teniendo en cuenta también las finalidades de esta sub fase.

2.3.2 Hipótesis Principal y Especificaciones

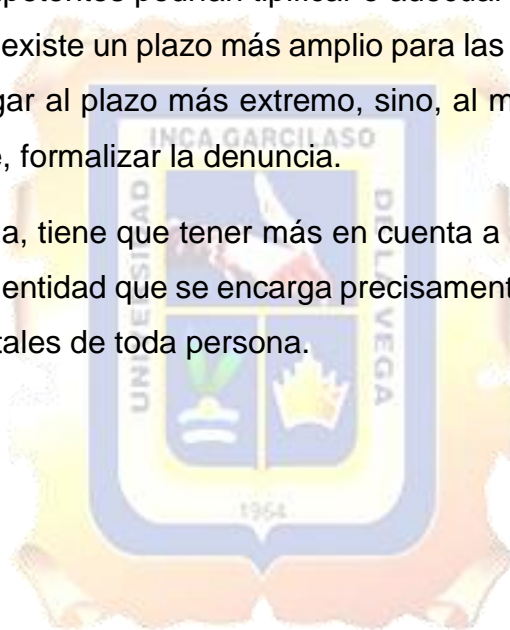
2.3.2.1 Hipótesis Principal

El plazo máximo de las diligencias preliminares en delitos de Organización Criminal.

2.3.2.2 Especificaciones:

Las fiscalías competentes podrían tipificar o adecuar como crimen organizado teniendo en cuenta que existe un plazo más amplio para las investigaciones, pero, no necesariamente prolongar al plazo más extremo, sino, al momento de individualizar al presunto responsable, formalizar la denuncia.

La Corte Suprema, tiene que tener más en cuenta a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, entidad que se encarga precisamente de la no vulneración de los derechos fundamentales de toda persona.



CAPITULO III

3.1 Conclusión y Recomendaciones

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna y protectores de los derechos fundamentales, en su Sentencia vinculante del expediente N°3509-2009-PHC/TC ha sido claro al defender y proteger el plazo razonable; en el caso en concreto, el recurrente a este Habeas Corpus Chacón Málaga, estuvo implicado en un proceso con hasta otros 34 investigados por el delito de corrupción de funcionarios, el inicio de las indagaciones que tiene el Ministerio Público fue el 28 de noviembre del año 2000, mientras que la sentencia del TC por el habeas corpus interpuesta fue en el año 2009. El órgano jurisdiccional competente, al ver que transcurrían años sin existir una sentencia, hizo des acumulación hasta en 2 oportunidades, teniendo así 5 expedientes derivados de un mismo proceso. Para el colegiado del TC mientras no existiera una sentencia, se recalca el Principio de Presunción de Inocencia, y, como en el tiempo de las investigaciones no existía nada concreto para el recurrente del habeas corpus, se entiende que el investigado es inocente, asimismo, el comportamiento -en este caso- de Chacón Málaga no ha sido obstruccionista, factor importante para resolver el presente habeas corpus. Si tenemos en cuenta que, el caso vinculante ha sido complejo, y, el TC no ha permitido que esté siendo investigado por mas de 8 años y por ello lo excluyen del proceso -declarada fundada en parte-, qué sentido tendría que en la primera etapa del código procesal penal existan plazos de investigación por 9 años.

Es decir, el máximo intérprete de la Constitución ya ha sido claro y ha recalcado que ninguna persona puede estar siendo sometida a indagaciones de entidades estatales, puesto que, se vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y esto afecta directamente al debido proceso.

Otro punto en que el autor esta en controversia de la casación N°599-2018 Lima, es el enunciado 1.10 de esta, donde hace mención que las diligencias preliminares en investigaciones a perpetrados por imputados a integrantes de organizaciones criminales, existirían “diligencias especiales” por recurrir a indagaciones como la intervención de las comunicaciones, agente en cubierto, etc. y que lo urgente e inaplazable no estaría calificándose en un sentido temporal; empero

se olvida que la finalidad de las diligencias preliminares es objetiva, y, el sustento para formalizar la investigación es simplemente individualizar a los imputados y al agraviado. Incluso los diversos actos de investigación que realice el ministerio público, las puede realizar paralelamente, no es necesario culminar un acto de investigación para empezar otro; por ejemplo, se pueden remitir oficios a distintas entidades privadas para el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, etc., estas entidades tienen el deber de cumplir lo que exige el órgano jurisdiccional en un plazo de días hábiles.

Asimismo, se ha obviado que la casación 02-2008 La Libertad menciona que el plazo máximo de las diligencias preliminares no puede ser superior a la sub fase de la investigación preparatoria formalizada, sin embargo, si la iguala, pero, su prolongación por otros 36 meses más, lo avala para poder concretar que el plazo máximo de las diligencias preliminares es de 36 meses.

Otra conclusión que se estima es que el representante del Ministerio Público alega a prolongar los plazos para estar seguro de su formalización, puesto que, en sede preliminar el fiscal es el que decide, si la formaliza, ya no es el fiscal, sino el juez de la investigación preparatoria.

En el antiguo código, el fiscal formalizaba sin temor, puesto que, las investigaciones la hacían el juzgado competente, así las cosas, el mismo juzgado competente no distinguía el crimen organizado, puesto que la ley 30077 no existía, separaba los casos entre sumario y ordinario.

En cuanto al Control de plazo, si en un caso de crimen organizado el representante del Ministerio Público prolonga por hasta 36 meses de la etapa indagatoria, de que podría servir interponer un control de plazo, perdería su valor o por lo menos la finalidad más importante de este.

Una figura “nueva” a este modelo del proceso penal, es la Colaboración eficaz, en ella el investigado al querer ser aspirante a colaborador eficaz, automáticamente ya se está auto incriminando, y, para que pase de aspirante a colaborador, se realizan ciertas investigaciones de corroboración, sin embargo, esta figura, debería de acelerar las investigaciones en cuanto a las organizaciones criminales, puesto que, el

colaborador delata a su propia organización, teniendo en cuenta esto, aun así existe un plazo extenso de hasta 9 años (en la primera etapa).

Por estas consideraciones, se recomienda que, por lo menos, si el representante del ministerio público va a extender el plazo máximo en diligencias preliminares, que justifique la necesidad y las cumpla, puesto que, si bien es cierto la casación en mención lo expresa, pero en la práctica no se cumplen.

Por tanto, se debería de considerar realizar una nueva revisión, a través de otra casación, acuerdo plenario, sentencia, etc. para la interposición de un plazo más cercano al plazo justo para que se esté siendo investigado.



BIBLIOGRAFÍA

Decreto Legislativo N°957, 22 de julio del 2004, Código Procesal Penal, Lima - Perú, 2004.

Constitución Política del Perú, 29 de diciembre de 1993, Lima, Congreso Constituyente Democrático, Lima – Perú. 1993.

Casación N°66-2010 Puno, 26 de abril del 2011, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, Lima - Perú. 2010.

Casación N°02-2008 La Libertad, 03 de junio del 2008, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, Lima - Perú. 2008.

Casación N°318-2011 Lima, 22 de noviembre del 2012, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, Lima – Perú. 2012.

Casación N°134-2012 Ancash, 13 de agosto del 2013, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, Lima - Perú. 2013.

Casación N°144-2012 Ancash, 11 de julio del 2013, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, Lima – Perú. 2013.

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 15 de noviembre del 2000.

Ley N°30077, 20 de agosto del 2013, Ley Contra el Crimen Organizado, Lima – Perú. 2013

Expediente N°3509-2009-PHC/TC, Lima, 19 de octubre del 2009, Sentencia del Tribunal Constitucional, Lima – Perú. 2009.

Casación N°528-2018 Nacional, 11 de octubre del 2018, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, Lima – Perú. 2018.

Casación N°599-2018 Lima, 11 de octubre del 2018, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, Lima – Perú. 2018.

Paucar. M. 2016. *El Delito de Organización Criminal*. Lima – Perú: IDEAS.

Prado. V. 2015. *Criminalidad organizada y Lavado de Activos*. Lima – Perú: IDEMSA.



ANEXOS

Casación N°599-2018 Lima



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.º 599-2018
LIMA



Diligencia preliminares en crimen organizado: alcances, plazo y ampliaciones.

Sumilla. I) En las investigaciones por crimen organizado se debe realizar una interpretación sistemática y teleológica de los incisos uno y dos del artículo trescientos treinta del Código Procesal Penal. El carácter de urgente e inaplazable no está vinculado, en estricto, al factor tiempo. II) En lógicas complejas de crimen organizado, las investigaciones deben llevarse a cabo en un plazo razonable que, como límite y de manera excepcional, no puede exceder el plazo ordinario de investigación preparatoria, atendiendo a su gravedad, complejidad y necesidad de especiales técnicas de investigación. III) Es posible ampliar el plazo de las diligencias preliminares, aun cuando el plazo se encuentre vencido, dentro del previsto como plazo máximo. En tal supuesto, el fiscal será pasible de sanción disciplinaria.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, once de octubre de dos mil dieciocho


VISTOS y OÍDO: en audiencia pública, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular contra la Resolución número doce, emitida por mayoría, el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que **revocó** la resolución que declaró fundada la solicitud de control del plazo de la investigación preliminar en la investigación que se sigue por la probable comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado; reformándola, se declara infundada la solicitud de control de plazo de la investigación preliminar formulada por la defensa técnica con motivo de las diligencias preliminares desplegadas ante la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Interviene como ponente la señora jueza suprema Barrios Alvarado.




FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO



Elevada la causa a este Supremo Tribunal, y cumplido con el trámite de traslado a las partes procesales con interés y legitimidad para obrar, se expidió el auto de calificación el veinte de julio del presente año¹, que declaró bien concedido el recurso de casación excepcional interpuesto por la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular, a efectos de que la Corte Suprema cumpla su función uniformizadora de la jurisprudencia y defina los alcances del instituto procesal penal, diligencias preliminares, al que el Código Procesal Penal –en adelante CPP– le ha dedicado una regulación abierta.



Los ámbitos a examinar son por las causales previstas en los incisos uno, dos y cinco del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, como se establece en los considerandos cuarto y quinto del auto de calificación².

¹ A folios ciento cuarenta del cuaderno de casación.

² "Cuarto. [...] En el presente caso se discute tanto el alcance de las denominadas "diligencias preliminares" (artículo 330 apartados 1 y 2, del Código Procesal Penal), cuanto la determinación plazo de las mismas y sus posibles ampliaciones (artículo 334, apartado 2, del Código Procesal Penal). Cabe agregar que en esta causa las diligencias preliminares se iniciaron el veinte de octubre de dos mil quince y, luego de varias ampliaciones del plazo de las mismas, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dictó la disposición de trece de octubre de dos mil diecisiete que adecuó el plazo máximo de aquellas a treinta y seis meses. Esta decisión de la Fiscalía debe ser examinada, desde la legalidad procesal, para dilucidar su conformidad con el ordenamiento. [...]. Quinto. Que sobre el particular se han emitido, por lo menos, dos sentencias casatorias: 144-2012 oblicua Ancash, del once de julio de dos mil trece, y 134-2012 oblicua Ancash, de trece de agosto de dos mil trece. Debe analizarse la compatibilidad de estas decisiones con el auto de vista del Tribunal Superior y, en su caso, la interpretación idónea de los artículos del Código Procesal Penal antes citados. Las diligencias preliminares, como una fase que discrecionalmente puede disponer el Ministerio Público, desde luego, está sujeta a su ajuste con el propio Código y a criterios de razonabilidad y proporcionalidad –los cuales, además, han de concretarse en la medida de lo posible–. Este recurso de casación servirá, entonces, para que la Corte Suprema cumpla su función uniformizadora de la jurisprudencia y defina los alcances de un instituto penal al que el Código Procesal Penal le ha dedicado una regulación abierta".



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.º 577-2018
LIMA

- I) Inobservancia de precepto constitucional (tutela jurisdiccional).
- II) Quebrantamiento de precepto procesal.
- III) Apartamiento de doctrina jurisprudencial.

En consecuencia, se determinará:

- I) El alcance de las denominadas diligencias preliminares (artículo trescientos treinta, apartados uno y dos del CPP).
- II) La determinación del plazo de las diligencias preliminares en la investigación por crimen organizado y sus posibles ampliaciones (artículo trescientos treinta y cuatro, apartado dos, del CPP).
- III) Apartamiento de doctrina jurisprudencial invocada por el casacionista: Sentencia Casatoria número ciento treinta y cuatro-dos mil doce/Áncash, del trece de agosto de dos mil trece.

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN

Emitida la resolución por la Sala Superior, que revocando declara infundada la solicitud de control de plazo que planteó contra la disposición fiscal dictada en el procedimiento de diligencias preliminares, la defensa técnica plantea el recurso de casación excepcional bajo los siguientes argumentos:

2.1. Vulneración de preceptos constitucionales (artículo cuatrocientos veintinueve.uno del CPP)

El accionante alegó la vulneración de sus derechos a:

- Vulneración de la tutela judicial

Alega que se ha lesionado este derecho fundamental, por cuanto a pesar de que el Juzgado ha declarado fundada su apelación, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional avaló la actividad de la fiscalía, que continuó con las diligencias programadas que fueron dispuestas sin fundamentar la utilidad y la pertinencia. Por el contrario, amparado en el apartado uno del artículo cuatrocientos dieciocho del CPP –apelación con efecto suspensivo– prosiguió con las diligencias preliminares investigación.



Que el Juez de primera instancia asumió el criterio jurisprudencial fijado en la Casación número dos-dos mil ocho/La Libertad, que establece que las diligencias preliminares tienen su propia finalidad (trescientos treinta-dos del CPP) y su plazo diferenciado, y se sujetan a un mecanismo de control distinto (trescientos treinta y cuatro-dos del CPP) al de investigación preparatoria.

Así, el juzgado consideró, erróneamente, que la decisión que ampara el control de plazo es una que pone fin a la instancia. El mencionado auto no pone fin a la instancia, puesto que si bien genera un doble grado de jurisdicción, no se tiene una doble instancia.

2.2. **Infraacción de normas procesales (artículo cuatrocientos veintinueve-dos del CPP)**

Sobre el plazo de las diligencias preliminares, el casacionista refiere su inobservancia, puesto que el artículo trescientos treinta y cuatro-dos del CPP prevé como plazo máximo de las diligencias preliminares el plazo de sesenta días, dentro del cual el fiscal puede disponer de todas aquellas diligencias y actuaciones probatorias que considere urgentes e inaplazables.

Argumenta que el mencionado precepto regula expresamente el plazo de las diligencias preliminares y la forma de control. La resolución cuestionada lesionó la disposición antes descrita, así como la doctrina jurisprudencial establecida en la Sentencia de Casación número ciento treinta y cuatro-dos mil doce por cuanto:

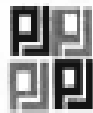
- o Omitió pronunciarse respecto del vencimiento del plazo de la disposición del dos de diciembre de dos mil quince; pese a ello, luego de trescientos sesenta días de vencido el plazo se emitió la disposición del tres de julio de dos mil diecisiete (que fijó un plazo distinto de sesenta días de diligencias preliminares).
- o Luego de vencido el plazo de la primera disposición, se emitió la segunda, la cual vulnera el apartado dos del artículo trescientos treinta y cuatro del CPP. Su actuación se produjo cuando precluyó la etapa.



- o Sostiene que se inobservó el inciso dos del artículo trescientos treinta del NCPP, referido a la naturaleza de la investigación preliminar y las diligencias que pueden realizarse, afirmando que:
- o La Sala Penal Nacional consideró que los actos de investigación durante las diligencias preliminares podrían no atender a su naturaleza inmediata y urgente; que lo urgente o inaplazable está íntimamente ligado al factor tiempo, que está a su vez estrechamente vinculado al denominado espacio. Son aquellos cuyo resultado depende de la celeridad con la que se desarrolla y no pueden ser postergados en el tiempo.
Los actos urgentes tienen como finalidad también a la individualización del o los agentes. Este es un requisito sine qua non para poder formalizar la investigación preparatoria, y es en realidad el único argumento por el cual las diligencias preliminares podrían durar más allá del breve tiempo que se les ha asignado y hasta que el agente sea identificado.
- o La fase de diligencias preliminares debe ser breve, es decir, todos los actos que se desarrollan durante las diligencias preliminares tienen las características de ser urgentes o inaplazables.

2.3. Infracción de doctrina jurisprudencial (artículo cuatrocientos veintinueve.cinco del CPP)

La Sala se aparta de lo dispuesto en el fundamento jurídico segundo de la Sentencia Casatoria número ciento treinta y cuatro-dos mil doce/Áncash, en tanto considera que no es aplicable al presente caso, pues en dicha casación se hace referencia a la prórroga del plazo para la investigación preparatoria y no plazo de las diligencias preliminares. No obstante, la referida casación sí hace referencia al plazo de las diligencias preliminares, bajo la denominación de "Investigación preliminar".



La Sala Penal no solo se aparta de la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema, sino que tergiversa sus alcances, haciendo una interpretación antojadiza y arbitraria de los términos empleados, en atención al empleo "indebido" de los términos que habría realizado la Corte Suprema.

TERCERO. MARCO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

La presente resolución deriva de las diligencias preliminares llevadas a cabo por el fiscal provincial al Partido Político Fuerza Popular, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado. Los hechos corresponden al origen de los ingresos económicos para financiar la campaña política del Partido Fuerza Popular, del año dos mil once, que tendrían procedencia ilegal.

Las investigaciones se inician en mérito a la denuncia de parte presentada por David Apaza Enríquez en que se pone en conocimiento que según el Informe Técnico/CE EEGG-once número cero cuarenta y tres-GSFP/ONPE, el Informe final de verificación sobre la información financiera de campaña electoral-elecciones generales-EE.GG.2011 Partido Político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) y la información obtenida de la página web de la ONPE, el Partido Político Fuerza Popular declaró para la campaña electoral de las elecciones generales dos mil once -periodo comprendido entre diciembre de dos mil diez y el cierre de campaña electoral, junio de dos mil once-, haber recibido aportaciones/ingresos del monto de S/ 17 450 753.93 soles; provenientes de aportaciones individuales en efectivo y en especie la suma de S/ 14 804 650.55 soles e ingresos por actividades de financiamiento proselitista la suma de S/ 2 610 929.58 soles y otros ingresos de campaña electoral de S/ 35 173.80 soles.

De acuerdo con el Informe Técnico/CE EEGG-once número cero cuarenta y tres-GSFP/ONPE, las aportaciones recibidas provienen de contribuciones de personas naturales y jurídicas por la suma de S/ 14 804 650.55 soles, de los cuales S/ 13 513 855.44 corresponden a aportaciones en efectivo y S/ 1 290 765.11 soles a aportaciones en especie. Asimismo, se indica que las aportaciones en efectivo por la suma de S/ 13 513 855.44 soles recibidas por el partido, S/ 13 408 885.44 (99.22 %) fueron depositados directamente en las cuentas bancarias del partido y S/ 105 000.00 (0.78 %) recibidos en



dinero en efectivo directamente de los aportantes y no a través de los medios de pago que señala el artículo treinta y dos del Reglamento Financiero y Supervisión de Fondos.

Las aportaciones recibidas en efectivo se depositaron en las cuentas bancarias N.º 055-7143062 (moneda nacional) y N.º 055-7143071 (moneda extranjera) que mantiene el Banco Scotiabank. El partido recibió aportaciones depositadas directamente en la cuenta corriente en nuevos soles por S/ 144 417.40 soles, las cuales no han podido ser identificadas.

En cuanto a los ingresos por actividades de financiamiento proselitista, examinaron la procedencia de S/ 4 736 164.60 soles, determinando que el dinero en efectivo obtenido fue depositado en las cuentas de ahorros en moneda nacional y extranjera que mantiene la organización política en el banco Scotiabank y que no se cuenta con un registro correlativo con indicación de la fecha del evento correspondiente y el detalle de los montos generados en letras y números, según lo establece el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

CUARTO. ITINERARIO DE LA ACTUACIÓN FISCAL

A fin de poner en contexto la controversia jurídica, se debe hacer el recuento de las actuaciones fiscales más relevantes:

- **Veinte de octubre de dos mil quince:** Disposición Fiscal s/n, emitida por la Vigésimosexta Fiscalía Provincial Penal de Lima, señaló un plazo de indagación de noventa días.
- **Dos de diciembre de dos mil quince:** Disposición Fiscal s/n, amplió en ocho meses las diligencias preliminares.
- **Tres de julio de dos mil diecisiete:** Disposición Fiscal s/n, se dispone "abrir investigación" a nivel fiscal por sesenta días.
- **Veintiocho de agosto de dos mil diecisiete:** la Fiscalía amplía investigación contra Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka por el plazo de noventa días.
- **Cinco de septiembre de dos mil diecisiete:** la fiscal provincial de la Vigésimosexta Fiscalía Provincial Penal de Lima eleva el Informe número cero cero uno-dos mil diecisiete-veintiséis FPPL-MP-FN al fiscal



lm

superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a efectos de que la investigación se lleve a cabo paralelamente con la investigación que lleva el despacho del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez al considerar que el caso sería de competencia de una Fiscalía Supraprovincial.

- **Doce de septiembre de dos mil diecisiete:** la defensa técnica del Partido Político solicita a la Vigésimosexta Fiscalía Provincial Penal de Lima que se emita disposición de conclusión de la investigación preliminar³.
- **Catorce de septiembre de dos mil diecisiete:** el fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas, Rafael E. Vela Barba, determina que el ingreso número quinientos noventa y tres-dos mil quince es de competencia del Subsistema Especializado en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio⁴. En el ítem octavo (análisis del caso), señala que también se apreciarían elementos indiciarios de una organización criminal con una aparente estructura de división de funciones y que los informes financieros permitirían inferir en el estado de la investigación que existiría una posible organización con división de funciones encargada de consignar aportes que no tendrían sustento de parte del Partido Político.
- **Catorce de septiembre de dos mil diecisiete:** la Vigésimosexta Fiscalía Provincial Penal de Lima dispone remitir la investigación relacionada al ingreso número quinientos noventa y tres-dos mil quince, seguida contra el Partido Político Fuerza Popular y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka por la probable comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado, corresponde a la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Quinto Despacho⁵.

³ Folios ciento ochenta y tres y s.

⁴ Folios ciento ochenta y seis y ss.

⁵ Folios ciento noventa y cinco y s.





AM

Q

Q

Q

- **Veinte de septiembre de dos mil diecisiete:** la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular solicita a la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, disponer la culminación de la investigación preliminar⁴.
- **Veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete:** Oficio número quinientos noventa y tres-dos mil quince/doscientos diecisiete-veintiséis FPPL-MP-FN la Vigésimosexta Fiscalía Provincial Penal de Lima cumple con remitir la presente investigación a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Quinto Despacho.
- **Trece de octubre de dos mil diecisiete:** la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, mediante Disposición número uno, adecúa la investigación seguida por la presunta comisión del delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, en agravio del Estado, seguido contra el Partido Político Fuerza Popular y Celemente Jaime Yoshiyama Tanaka, a las normas comprendidas en el Código Procesal Penal y la Ley número treinta mil setenta y siete (Ley de Criminalidad Organizada), califica el caso como una organización criminal y establece el plazo de treinta y seis meses de diligencias preliminares.
- **Veintinueve de enero de dos mil dieciocho:** el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante la Resolución número seis, declara fundada la solicitud de control de plazo de la investigación preliminar, deducida por la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular, da por concluida la investigación preliminar y ordena al representante del Ministerio Público emitir pronunciamiento en el plazo de veinte días.
- **Cuatro de abril de dos mil dieciocho:** la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, mediante Resolución número doce, reforma la resolución del a quo y revocando declara infundada la solicitud de control de plazo de la investigación preliminar formulada por la

⁴ Folios doscientos y s.



mm

defensa jurídica de Fuerza Popular, con motivo de las diligencias preliminares desplegadas ante la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado.

2

- **Veintitrés de abril de dos mil dieciocho:** la defensa técnica del Partido Político Fuerza Popular interpone recurso de casación excepcional, que por resolución del veinte de julio de dos mil dieciocho es declarada bien concedida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. EL ALCANCE DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN CRIMEN ORGANIZADO (ARTÍCULO TRESCIENTOS TREINTA, APARTADOS UNO Y DOS, DEL CPP).

1. 1. El Ministerio Público conforme al artículo ciento cincuenta y nueve, incisos cuatro y cinco, de la Constitución Política del Estado tiene como facultad funcional la de conducir o dirigir, desde su inicio, la investigación del delito, así como la de ejercitar la acción penal; tal facultad discrecional ancla su actuación funcional a principios y valores constitucionales. De ahí que su ejercicio debe decantar por la observancia y pleno respeto de los derechos fundamentales, pues el fiscal debe cumplir también con el principio de sujeción a la ley.
1. 2. La implementación del Código Procesal Penal en forma gradual ha dado lugar a que diferentes institutos procesales regulados de forma abierta hayan tenido disímiles alcances interpretativos colisionando con la predictibilidad de las resoluciones judiciales y afectando desde esta perspectiva el derecho a la tutela judicial efectiva, ello porque la casística no ha sido homogénea, de ahí que es necesario otorgar vía jurisprudencial criterios de interpretación de la norma, pues lo contrario incidiría en afectar la propia legitimidad del sistema de administración de justicia penal.

3

4



1.3.

El nuevo modelo de investigación procesal penal ha traído consigo la facultad exclusiva del fiscal⁷ de llevar a cabo "diligencias preliminares", de las que tiene el señoría y control, son conceptualizadas normativamente como parte de la investigación preparatoria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las define como aquellas que lleva a cabo el fiscal en la fase prejurisdiccional previa al proceso penal.

1.4.

Las "diligencias preliminares", como actuaciones iniciales del fiscal orientadas a una finalidad específica, no advierten un carácter jurisdiccional sino de indagación y de averiguación; conforme al rol de persecutor que le corresponde, posibilitan que pase a otra fase del proceso, si así lo decide, al instaurar la formalización de la investigación preparatoria o disponer el archivo definitivo.

1.5.

El fiscal, conforme al artículo trescientos treinta y uno del CPP, está facultado para realizar o delegar la actuación de "diligencias preliminares" de investigación en su condición de titular del ejercicio de la acción penal, a fin de **determinar si debe formalizar la investigación preparatoria**, lo que lo vincula con la obligación de actuar con objetividad e independencia de criterio.

1.6.

El artículo trescientos treinta y dos del CPP preceptúa su finalidad y señala:

Las Diligencias Preliminares tienen por **finalidad inmediata** realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlos debidamente (el resaltado es nuestro).

1.7.

La inicial actividad investigativa del fiscal no se agota con la realización de actos urgentes e inaplazables destinados a establecer: I) si tuvieron lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad; II) asegurar los elementos materiales de la comisión

⁷ El artículo trescientos treinta y uno CPP señala que puede requerir la intervención de la Policía.



del delito; III) individualizar a las personas involucradas y asegurarlas debidamente; sino que a estos se aúna la finalidad de determinar si se formaliza la investigación preparatoria (decisión que se realizará como resultado de las diligencias investigativas realizadas, dando término a esta fase prejurisdiccional).

1. 8. Los actos urgentes e inaplazables a los que hace referencia la norma procesal van ligados al propósito ulterior o finalidad mediata –de ser el caso– de formalizar investigación preparatoria; por lo que tales actos no deben ser vinculados en estricto a un sentido temporal. Lo que resulta de una interpretación sistemática y teleológica del artículo trescientos treinta, incisos uno y dos del CPP. Categorizar lo urgente y necesario solo a un mínimo de tiempo, limitaría la actuación fiscal, afectaría su rol investigativo y el principio de derecho de seguridad jurídica.

1. 9. La regulación procesal penal establece que el fiscal puede desarrollar investigaciones comunes, complejas, e investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. Es dentro de esta dinámica que adquiere sentido la interpretación antes señalada sobre lo “urgente o inaplazable”, ello en función de que en cada caso en concreto el fiscal debe satisfacer los presupuestos del artículo trescientos treinta y seis, uno del CPP para continuar con su investigación; de lo contrario, deberá archivar lo actuado.

1. 10. En los delitos de criminalidad organizada, por su impacto social, su peligrosidad y efectos en el contexto, la necesidad de la actividad indagativa es mayor, pues se debe realizar un tramado de diligencias especiales, recurriendo incluso a técnicas especiales de investigación⁸, la propia complejidad de la criminalidad organizada deriva en que realice una pluralidad de actos especiales de

⁸ En la Ley número treinta mil seiscientos y siete, Ley Contra el Crimen Organizado, se contemplan, en el título II, capítulo II, las técnicas especiales de investigación, tales como: la interceptación postal, la intervención de las comunicaciones, circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, el agente encubierto, acciones de seguimiento,



investigación, es por ello que lo urgente o inaplazable no puede calificarse en su sentido temporal estricto.

1. 11. Hay que considerar que existen dinámicas criminales donde las estructuras mismas evolucionan y hacen más compleja su indagación, allí es donde el rol del fiscal, encaminado a obtener indicios reveladores de la existencia del hecho criminal (delito) y la individualización de un significativo número de personas, conforme al artículo trescientos treinta y seis, uno del CPP, se complejiza. Por ello no es lo mismo realizar actos urgentes e inaplazables en la investigación de un delito común, que en una investigación de crimen organizado (en el presente caso, por ejemplo, se materializan con elaboración de un informe financiero y contable respecto de los fondos recaudados en los eventos "Rifa fujimorista" y "cocteles o cenas fujimoristas" o la solicitud de información a entidades públicas como Registros Públicos, Municipalidad y notarios).

1. 12. Afirma el carácter que lo urgente e inaplazable tiene una connotación distinta en las indagativas de crimen organizado el que la propia norma señale "[...] no obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación [...]" (artículo trescientos treinta y cuatro, dos del CPP), lo que en correlato con lo preceptuado en el artículo cinco, incisos uno y dos, de la Ley número treinta mil setenta y siete (Ley Contra el Crimen Organizado), afirma el sentido interpretativo que se fija.

1. 13. De ahí que lo afirmado por el casacionista respecto a que lo urgente e inaplazable en diligencias preliminares por crimen organizado solo debe vincularse al factor tiempo, y que todos los actos que se desarrollen durante esta fase tengan dichas características, no determina que la Sala Penal Nacional haya inobservado el artículo trescientos treinta, dos del CPP.



M

SEGUNDO. DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES Y SUS POSIBLES AMPLIACIONES (ARTÍCULO TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO, APARTADO DOS, DEL CPP)

2.1. EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN LA INVESTIGACIÓN POR CRIMEN ORGANIZADO

2.1.1. La presente versa sobre el sentido interpretativo que se debe dar al artículo trescientos treinta y cuatro.dos. del CPP, que regula el plazo de las "diligencias preliminares", pues desde su vigencia [dos mil cuatro] existe un problema de interpretación normativa, dado que el legislador no ha fijado un baremo que determine cuándo finaliza esta actividad fiscal; y, al estar íntimamente vinculado a la necesidad de garantizar el derecho fundamental de la persona a ser investigado y juzgado en un plazo razonable, se precisa su tutela a fin de controlar el ejercicio arbitrario del mismo.

2.1.2. El artículo trescientos treinta y cuatro.dos del CPP establece que "El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación".

2.1.3. Este precepto contempla un plazo ordinario referencial –de sesenta días– y un plazo distinto que se fija en función de las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. En este segundo caso, si bien el legislador ha optado por no precisar de manera cuantitativa el límite máximo del plazo de las diligencias preliminares, este Supremo Tribunal –tomando como referencia el plazo previsto en el artículo trescientos cuarenta y dos del CPP para la investigación preparatoria– ha establecido en las Sentencias Casatorias número cero dos-dos mil ocho-La Libertad, del tres de junio de dos mil ocho y número ciento cuarenta y cuatro-dos mil doce- Áncash, del once de julio de dos mil trece⁹, que el plazo

⁹ La Sentencia Casatoria número dos-dos mil ocho-La Libertad, en su fundamento jurídico décimo segundo, último párrafo señala: "[...] la fase de diligencias preliminares



máximo de las diligencias preliminares (en las investigaciones comunes y complejas) no puede, en la hipótesis más extrema, ser superior al límite máximo de la duración de la investigación preparatoria.

2.1.4. Es de precisar que en su versión primigenia, el artículo trescientos cuarenta y dos del CPP, en sus incisos uno y dos, contemplaba para la investigación preparatoria únicamente dos plazos: uno **común** (de ciento veinte días naturales, prorrogable por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales) y otro para las investigaciones **complejas** (de ocho meses). Posteriormente, con la Ley número treinta mil setenta y siete (Ley Contra el Crimen Organizado), vigente desde el primero de julio de dos mil catorce, se modificó el inciso dos del artículo trescientos cuarenta y dos del CPP y se incorporó el plazo de investigación preparatoria de treinta y seis meses para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de **organizaciones criminales**, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

2.1.5. Es claro que la falta de un **plazo legal** máximo para las "diligencias preliminares" de investigaciones comunes, complejas o de criminalidad organizada afecta el principio-derecho de seguridad jurídica; por ello, es necesario que estas se realicen siempre dentro de un **plazo razonable** (garantía derivada del derecho fundamental al debido proceso), que no es el equivalente al plazo legal, sino que depende de las circunstancias particulares que presente cada caso. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que para determinar el plazo razonable en un caso concreto, se debe considerar la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes y la actuación de los tribunales¹⁰.

no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la Investigación Preparatoria regulada en el artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal", criterio que es reproducido en el fundamento jurídico sexto de la Sentencia Casatoria número ciento cuarenta y cuatro-dos mil doce-Áncash.

¹⁰ Expediente número cinco mil doscientos veintiocho-dos mil seis-PHC/TC, del quince de febrero de dos mil siete, fundamento jurídico trece.



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.º 599-2018
IIMA

2.1.6. El Tribunal Constitucional ha precisado, como doctrina de carácter jurisprudencial¹¹, que para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: uno **subjetivo**, que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del fiscal; y otro **objetivo**, que está referido a la naturaleza objeto de los hechos de investigación, dentro de este –a juicio del Tribunal– cabe comprender la complejidad de los hechos a investigar. Considera que el plazo razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas o años, sino que tal razonabilidad inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso¹².

2.1.7. En efecto, el derecho al plazo razonable no solo permite el control de aquellos plazos latos y excesivos, sino también aquellos cortos, reducidos, que impiden sustanciar de modo debido la investigación. De ahí que la determinación del plazo razonable no puede establecerse considerando solo el transcurso del tiempo, sino que requiere una evaluación objetiva a partir de las circunstancias especiales que rodean cada caso en concreto.

2.1.8. Por ello, las diligencias preliminares orientadas a establecer la ocurrencia de los hechos y la delictuosidad de los mismos en una organización criminal (lo que advierte una infracción de especial gravedad) requieren para sus fines un plazo más lato y razonable, pues uno reducido o limitado impediría su adecuada conclusión.

2.1.9. El artículo cinco de la Ley número treinta mil setenta y siete señala:

"1. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a organizaciones criminales es de sesenta días, pudiendo el Fiscal fijar un plazo distinto en atención a los

¹¹ Ibidem, fundamentos jurídicos quince y dieciséis.

¹² Expediente número dos mil seiscientos cuarenta y ocho-dos mil diez-PHC, del once de agosto de dos mil diez, fundamento jurídico nueve.



características, grado de complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación”.

2. Para determinar la razonabilidad del plazo, el Juez considera, entre otros factores, la complejidad de la investigación, su grado de avance, la realización de actos de investigación idóneos, la conducta procesal del imputado, los elementos probatorios o indicios recabados, la magnitud y grado de desarrollo de la presunta organización criminal, así como la peligrosidad y gravedad de los hechos vinculados a esta”.

Una interpretación sistemática de los incisos uno y dos habilita en investigaciones de crimen organizado un plazo mayor para las “diligencias preliminares”, ello en función de su propósito objetivo: los hechos de investigación.

2.1.10. Siguiendo las líneas interpretativas en las Sentencias Casatorias número dos-dos mil ocho-La Libertad y número ciento cuarenta y cuatro-dos mil doce-Áncash respecto a considerar como baremo el plazo máximo fijado en la investigación preparatoria; en el marco de una investigación a una organización criminal, el plazo máximo de las diligencias preliminares no debe superar los treinta y seis meses.

2.1.11. Tal plazo se justifica en atención a que una organización criminal, dada la dinámica de las conductas derivadas, puede requerir mayor plazo al previsto para las indagaciones de casos comunes o complejos, presenta mayores dificultades. Se exige una mayor inversión de recursos personales, logísticos, demanda un tiempo superior para investigarla, procesarla y juzgarla, a diferencia de otros procesos¹³ y es necesario potenciar la eficacia de la persecución penal y no limitar la operatividad fiscal, en tanto es posible que decida técnicas especiales de investigación.

2.1.12. Ello no significa que el plazo máximo de treinta y seis meses deba ser utilizado en su integridad, pues en función del interés investigativo el fiscal puede optar por un plazo menor. La disposición que dicte el

¹³ Acuerdo Plenario Extraordinario número uno-dos mil diecisiete/CJ- ciento dieciséis, fundamento jurídico ocho.



fiscal debe justificar la necesidad del plazo y la razonabilidad de las diligencias ordenadas.

2.1.13. El grado de discrecionalidad del que está investido el fiscal para que lleve a cabo su investigación debe estar precedido del principio de interdicción a la arbitrariedad, pues su incumplimiento legitima que el investigado acuda al juez de Investigación Preparatoria instando su pronunciamiento (conforme con lo previsto en el artículo trescientos treinta y cuatro.dos del CPP)¹⁴.

2.1.14. En el presente caso, mediante Disposición Fiscal número uno, del trece de octubre de dos mil diecisiete se resolvió, entre otras: **I)** adecuar la investigación seguida al Partido Político Fuerza Popular y Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka a la Ley número treinta mil setenta y siete; **II)** se establece como plazo máximo de las diligencias preliminares treinta y seis meses (tiene como fecha de inicio el veinte de octubre de dos mil quince); **III)** amplía la investigación contra Keiko Sofia Fujimori Higuchi, Jorge A. Treles Montero y Augusto Mario Bedoya Camero.

2.1.15. Para dilucidar si el plazo máximo fijado por el fiscal, de treinta y seis meses, señalado para la actuación de la actividad investigativa se encuentra dentro de un plazo razonable, dado el criterio antes señalado (que considera la Ley número treinta mil setenta y siete, Ley Contra el Crimen Organizado), es de marcar que el suceso indagativo conforme a la disposición fiscal hace alusión a un conjunto de hechos en los que se apreciarían elementos indiciarios de una organización criminal con una aparente estructura de división de funciones: que los informes financieros permitirían inferir, en el estado de la investigación, que existiría una posible organización con división de funciones encargada de consignar aportes que no tendría sustento por parte del Partido Político Fuerza

¹⁴ Art. Trescientos treinta y cuatro.dos CPP "[...] Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del fiscal y del solicitante."



Popular. En tal mérito, esta disposición fiscal justifica la razonabilidad de la adecuación. Por lo demás, es de considerar que cuando la investigación se encuentra en su nivel inicial prejudicial, no es de requerir al fiscal en sus disposiciones el detalle concreto y acabado de los hechos a investigar, su propio nivel indagativo lo impide. Más aún cuando se advierte la presencia de dos elementos necesarios para su investigación: una causa probable y búsqueda de la comisión de un ilícito penal.

2.1.16. En el presente caso, las diligencias preliminares se iniciaron el veinte de octubre de dos mil quince, el plazo razonable vencerá el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, fecha en la que el fiscal determinará si formaliza la investigación preparatoria o archiva lo actuado.

2.2. EL PLAZO Y SU AMPLIACIÓN EN INVESTIGACIONES DE CRIMEN ORGANIZADO

2.2.1. La norma debe dar una respuesta integral a aquellas situaciones de relevancia social como el crimen organizado. La estructura del proceso penal inicialmente fue concebida desde una visión de procesos ordinarios y complejos sin considerar otros aspectos delictuales relevantes que ahora se advierten a través del crimen organizado.

2.2.2. Al ser las "diligencias preliminares" de regulación abierta, la Corte Suprema debe dar una respuesta jurisprudencial que solucione este vacío normativo.

2.2.3. Una de las características de la investigación es su progresividad, no es posible afirmar desde su inicio que el fiscal podrá proyectarse respecto a la integridad de las diligencias investigativas que llevará a cabo, pues el abanico de posibilidades indagativas no se advierte al iniciarse la diligencia preliminar. La estrategia fiscal debe decantar por usar un plazo inicial menor al de treinta y seis meses. Dentro de este marco temporal, es razonable su ampliación, la oportunidad será siempre previa al vencimiento del plazo inicialmente fijado.





cm

2.2.4. Si la ampliación de las diligencias preliminares se realiza fuera del plazo inicialmente fijado, origina responsabilidad disciplinaria del fiscal, conforme con el artículo ciento cuarenta y cuatro.dos del CPP¹⁵. En tal supuesto, los actos defectuosos, en mérito al principio de conservación, mantienen su validez.

2.2.5. En el presente caso, se advierte que hubo sucesivas ampliaciones, las cuales cuestiona la defensa del casacionista. Al respecto, se advierte que el fiscal provincial emitió la disposición del tres de julio de dos mil diecisiete, que ordenó "abrir" investigación, cuando se había vencido el plazo previo señalado; no obstante, el casacionista no solicitó control de plazo de manera inmediata sino con posterioridad. La ampliación del plazo, pese a encontrarse este vencido, conforme a lo señalado, origina responsabilidad disciplinaria del fiscal a cargo de la investigación preliminar. En el presente caso, dada la falta de diligencia en la actuación del fiscal, es al Ministerio Público al que le compete actuar disciplinariamente.

TERCERO. APARTAMIENTO DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL AL HABERSE EMITIDO LA SENTENCIA CASATORIA NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO-DOS MIL DOCE/ÁNCASH, DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE

3.1. El casacionista señala que la Sala Penal Nacional se aparta de la Sentencia Casatoria número ciento treinta y cuatro-dos mil doce-Áncash, del trece de agosto de dos mil trece, que preceptúa como doctrina jurisprudencial vinculante lo prescrito en el fundamento jurídico segundo, respecto a la prórroga de la investigación preliminar y si procede efectuarla pese a estar vencido el plazo fijado por el Ministerio Público.

3.2. La norma habilita a la Sala Penal de la Corte Suprema, bajo determinados supuestos, a declarar los efectos vinculantes de la

¹⁵ Artículo ciento cuarenta y cuatro.dos del CPP. Los plazos que solo tienen como fin regular la actividad de Fiscales y Jueces serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia solo acarrea responsabilidad disciplinaria.



gm

3.3.

3.4.

3.4.

3.4.

sentencia casatoria, ello en armonía para consolidar la previsibilidad de las decisiones judiciales y potenciar su universalización interpretativa; por ello, la selección de un caso concreto del que se crea un precedente, afirma la seguridad jurídica e igualdad ante la ley, al brindar coherencia al sistema de justicia.

3.3. En el presente caso, el apartamiento del precedente casacional número ciento treinta y cuatro-dos mil once, del trece de agosto de dos mil trece, que se denuncia por parte de la defensa, establece que no cabe habilitación judicial del plazo y que al vencimiento del mismo no corresponde el amparo de solicitudes de prórroga¹⁶, sino continuar con el normal desarrollo de las siguientes etapas del proceso; por lo que, vencido el plazo de la investigación preliminar se "debe proceder con el requerimiento fiscal acusatorio o de sobreseimiento"¹⁷ (conceptúa que opera la caducidad).

3.4. La regla del precedente casacional es la obligatoriedad de su aplicabilidad como sustento del derecho fundamental a la igualdad, lo que no limita su evolución ni desarrollo progresivo en atención a que debe responder a las necesidades y valores sociales. La adopción de un precedente o una línea de interpretación no puede tender al inmovilismo y a la fosilización judicial¹⁸, el respeto al precedente no limita o precisar, aclarar, ampliar o corregir un entendimiento fijado como tal, sobre todo cuando opera un cambio social o de marco normativo.

¹⁶ Casación número ciento treinta y cuatro-dos mil doce, fundamento jurídico segundo: "De allí que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público -en su condición de titular de la acción penal y director de la investigación- no corresponda el amparo de solicitudes de prórroga del mismo. Menos aún, que en tal circunstancia de conclusión del plazo, recién se pretenda la calificación del caso como complejo. Asimismo, en aplicación del principio de la preclusión procesal".

¹⁷ Idem. "En tal supuesto corresponde continuar con el normal desarrollo de las siguientes etapas del proceso. Así, en el caso del vencimiento del plazo de la investigación preliminar, el Ministerio Público debe proceder con el requerimiento fiscal, acusatorio o de sobreseimiento".

¹⁸ AARNIO, Aulis. La relación como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 127.



CM

3.5. En la casación cuyo apartamento se cuestiona, se advierten dos considerandos:

1

➤ **Primer considerando:** afirma que mediante Sentencia Casatoria número cincuenta y cuatro-dos mil nueve, del veinte de julio de dos mil diez, se estableció como doctrina jurisprudencial que las actividades del fiscal relacionadas al ejercicio de la acción penal no pueden ser sancionadas con la caducidad del plazo previsto en la ley, pues ello importaría la vulneración de normas constitucionales; además, el artículo ciento cuarenta y cuatro del CPP no permite que se declare la caducidad de la actividad del fiscal¹⁹.

2

➤ **Segundo considerando:** no cabe la habilitación judicial del plazo, y frente al vencimiento del mismo no corresponde el amparo de solicitudes de prórroga.

➤ **Conclusión:** frente al vencimiento del plazo no corresponde la prórroga sino continuar con el normal desarrollo de las siguientes etapas del proceso; esto es, el Ministerio Público debe proceder con el requerimiento fiscal, acusatorio o de sobresumimiento.

3

3.6. La Sala Penal Superior señala que se aparta excepcionalmente de la sentencia casatoria porque no es clara y conceptúa que se trabajó bajo el supuesto de que el caso que promovió el recurso se encontraba en etapa de investigación preparatoria formalizada y no en diligencias preliminares.

3.7. De lo señalado corresponde poner en evidencia, en primer lugar, si los hechos son sustancialmente iguales o hay diferencias entre los casos.

4

3.8. La controversia tiene como sustento las diligencias preliminares llevadas a cabo en una investigación compleja; la presente versa sobre las diligencias indagativas en casos de crimen organizado (Ley

¹⁹ Considerando primero de la Sentencia Casatoria número ciento treinta y cuatro-dos mil doce-Áncash.





PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.º 599-2018
LIMA



número treinta mil setenta y siete, Ley Contra el Crimen Organizado, vigente desde el primero de julio de dos mil catorce), ambas no constituyen casos homólogos en su integridad, han sido emitidas en un periodo de cinco años, al resolverse la Casación número ciento treinta y cuatro-dos mil doce-Áncash no se encontraba vigente la referida Ley número treinta mil setenta y siete; por lo que concluimos que los supuestos no son sustancialmente iguales.



3.9. Con relación a la caducidad de las diligencias preliminares por vencimiento del plazo ordinario, es del caso evaluar la ratio decidendi de la casación en cuestión. Así, de su primer considerando se extrae que amparándose en la Sentencia Casatoria número cincuenta y cuatro-dos mil nueve, del veinte de julio de dos mil diez, precisa que las actividades del fiscal relacionadas al ejercicio de la acción penal, no pueden ser sancionadas con la caducidad del plazo, criterio que se asume en esta casación.



3.10. La ratio decidendi de la Casación número ciento treinta y cuatro-dos mil doce-Áncash se justifica en la Carta Magna, Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal; criterio que coincide con el sentido interpretativo que se da en la presente respecto de la no caducidad de la diligencia preliminar al vencimiento del plazo. Con la adición, en esta casación, de que si el plazo se venciera sin que se haya realizado ampliación, origina responsabilidad disciplinaria del fiscal, conforme al mandato de la norma previsto en el artículo ciento cuarenta y cuatro.dos del CPP.



3.11. Por ello, a falta de precisión de la Casación número ciento treinta y cuatro-dos mil doce-Áncash, la Sala Penal Superior justifica las razones de su decisión (en estricto no hay tal apartamiento). El razonamiento propuesto de la distinción que se realiza –basada en los fundamentos precedentes– lleva a la precisión que se señala.

Por tanto, este motivo casacional también debe desestimarse y así se declara.



DECISIÓN

Por estos fundamentos, acordaron:

- I. **DECLARAR INFUNDADO** el recurso de casación por inobservancia de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal y apartamiento de doctrina jurisprudencial «artículo cuatrocientos veintinueve, incisos uno, dos y cinco, del Código Procesal Penal», interpuesto por el abogado defensor del Partido Político Fuerza Popular contra la Resolución número doce, emitida por mayoría, el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que revocó la Resolución número seis, del veinte de enero de dos mil dieciocho, que declaró fundada la solicitud de control de plazo promovida por la defensa técnica del citado partido en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de delito de lavado de activos, en agravio del Estado; reformándola, declaró infundada la solicitud de control de plazo de la investigación preliminar formulada por el señor abogado de Fuerza Popular, con motivo de las diligencias preliminares desplegadas ante la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado.
- II. **DISPONER** que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaría de esta Suprema Sala Penal y, acto seguido, se notifique a las partes personadas a la instancia, incluso a las no recurrentes.
- III. **MANDAR** que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al Órgano Jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

S. S.

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

SEQUEIROS VARGAS

CHÁVEZ MELLA

BERMEJO RÍOS

EBA/art

